000049/2022

Comodoro Rivadavia, de marzo de 2022.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Estos autos caratulados "**D. N., N. M. c/ T., P. R. s/ Ejecución de Honorarios" Expte. N° 49/22**, venidos del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución N° 1, Secretaría N° 1 (Expte. 1850/20), en virtud del recurso de apelación en subsidio interpuesto y fundado por la ejecutante a fs. 37/38, en contra de la providencia de fs. 36.

I. En la resolución impugnada, el magistrado rechazó regularle honorarios a la letrada ejecutante en causa propia.

Como fundamento de su decisión, indicó que la ejecución debe considerarse como una única etapa; para la cual, ya fueron regulados honorarios a fs. 23.

En contra de la resolución adoptada en la instancia de grado, la interesada interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio; a efectos de que este Tribunal la revoque.

A tal fin explicó que el fundamento de la decisión adoptada constituye un criterio ya superado; el cual, inclusive, se encuentra en contraposición con lo normado por la ley arancelaria y la actual jurisprudencia del Superior Tribunal.

II. Delimitada de este modo la cuestión traída a conocimiento del Tribunal, se impone señalar dos cuestiones.

En primer lugar y en lo que a la oportunidad procesal en la cual se deben determinar los emolumentos de los letrados, ya se ha dicho que "como regla general, la retribución profesional debe ser estimada por una

única vez y sólo en las oportunidades legales, es decir que no corresponde fijar regulaciones parciales, provisorias o provisionales, segmentarias, fragmentarias, disociadas o escalonadas, ni anticiparse a los tiempos que estipula el ordenamiento, ni solicitarse pagos a cuenta, es decir, no puede pretenderse regulación fuera de los estadios procesales que fija la ley, y que son los momentos en que se valoran las retribuciones pertinentes… De allí que, si el proceso no ha concluido ni ha cesado la participación profesional, no corresponde que el juez acceda a establecer los honorarios…" (Passarón, Julio Federico y Pesaresi, Guillermo Mario "Honorarios Judiciales" Tomo I, página 201/202, Ed. Astrea).

En segundo lugar, y tal como lo señala la recurrente, "… en el trámite de ejecución de honorarios corresponde se regulen los emolumentos de los profesionales del derecho aplicando la misma normativa referida a los procesos de ejecución de sentencia…" y agregan que "… los procesos de ejecución se consideran divididos en dos etapas; la primera de ellas comprende hasta la sentencia y la segunda los trabajados posteriores hasta su cumplimiento…" "…la división… tiende a permitir la clasificación de los trabajos realizados en el supuesto de actuación de más de un profesional… También es útil… para determinar en cualquier caso la extensión de la tarea realizada" (STJCh. SI N° 84/SCA/07)".

Es decir, "los honorarios en los procesos de ejecución deben ser regulados atendiendo a dos variables. Por un lado, el cumplimiento de una o de ambas etapas en la cual el trámite se encuentra dividido

y, por otro lado, si el ejecutado opuso o no excepciones" (esta Cámara SI N° 5/21, 27/22 entre muchas otras más).

Queda en evidencia de este modo y, tal como este Tribunal lo ha señalado de forma constante y monocorde en cada oportunidad en la cual fue llamado a intervenir, que todo el marco teórico seguido en la instancia de grado para establecer cuando y como regular los honorarios en un proceso de ejecución se encuentra largamente superado.

Conforme ello, el *a quo* reguló honorarios prematuramente cuando mandó llevar adelante la ejecución y el proceso aún no estaba finalizado. En dicha ocasión si bien fundó normativamente la solución en las disposiciones generales de los artículos 5, 6, 6bis, 7, 8, 9, 18, 36, 39, 46, 47, 48, 49 y 50 de la ley de aranceles, incumplió la manda de regular en términos porcentuales conforme ordena el art. 46.

Ahora bien, debemos precisar que el monto que integra la presente ejecución de honorarios a los fines arancelarios, está dado por el capital de $8.030,85 más intereses, lo que totaliza la suma de $11.909,35 conforme liquidación practicada en fs. 31. Esta aclaración se efectúa a fin de no generar confusión, pues en dicha liquidación está incluida la regulación efectuada en el presente trámite a fs. 23, con más IVA y sus intereses ($14.063,83).

Conforme lo expresado y siendo que el presente proceso está constituido por dos etapas y que procede una única regulación de honorarios a la finalización del mismo, corresponde determinar si la suma regulada en fs. 23 se encuentra dentro de los parámetros establecidos

en la ley arancelaria y si corresponde una nueva regulación.

Teniendo en cuenta el valor del proceso constituido por capital más intereses ($11.909,35), las dos etapas cumplidas, la trascendencia del trabajo profesional en relación al resultado respecto de la pretensión de la parte, falta de oposición de excepciones, merituándose de este modo la eficacia y el éxito obtenido y demás elementos que prevé la normativa arancelaria en los arts. 5 a 7, 18 y 39 de la Ley XIII N° 4 y N° 15 Digesto Jurídico, se concluye que los honorarios regulados en la primera instancia, no obstante su regulación en monto fijo ($11.623 -4 jus 08/06/21) resultan elevados, pues representan casi el 100% del monto del proceso, si se coteja con los porcentajes establecidos en la ley arancelaria (entre 7.7% y 14% = 11 y 20% -30%). Ello, no obstante destacar que al 02/11/21 fecha de la resolución cuestionada, el monto de 4 jus equivale a $13.743,36.

Y aquí hemos de analizar las pautas del art. 7º de la ley XIII Nº 4 y 15 que dispone que en los procesos ejecutivos se regularán como honorarios mínimos cuatro jus por cada etapa, que a la fecha asciende a la suma de $18.957,56 por una etapa, suma por la que pretende regulación la letrada recurrente, la que adicionada a la regulación ya efectuada de 4 jus sumaría la suma de $30.580,56.

En atención a tales parámetros y en el entendimiento que la aplicación lisa y llana de los porcentuales y mínimos previstos por el art. 7° del régimen arancelario citado, no guarda relación con la labor efectivamente

desarrollada y el monto del asunto, consagrando una desproporción entre el monto del presente proceso ($11.909,35) y los honorarios regulados en la primera instancia en la presente ejecución por una etapa (4 jus $11.623), se considera necesario aplicar el principio de proporcionalidad consagrado por la ley 24.432 en concordancia con la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema, según la cual con independencia de las escalas mecánicamente aplicadas, debe existir una relación de proporción entre la labor profesional y el honorario correspondiente, razón por la cual se considera que no corresponde efectuar nueva regulación de honorarios y considerar la suma de 4 jus regulada en fs. 23 como comprensiva de las dos etapas del proceso (Passarón Pesaresi: "Honorarios Judiciales" T 2, p. 82, Astrea 2008; esta Cámara Sala B SI N° 107/13, 22/18 y 23/18).

Ha decidido nuestro máximo Tribunal: "Si la sujeción estricta de los mínimos legales previstos en los regímenes arancelarios nacionales o locales que rigen la actividad de los abogados conduce a un resultado injusto frente a las características, materia y consecuencias institucionales y significación patrimonial del juicio en cuestión, resulta aplicable el art. 13 de la ley 24.432" (CSJ 377/2009 "AA2000 S.A. c/ Buenos Aires Provincia s/ Acción Declarativa, 24/09/2015).

En idéntico sentido ha dicho el Superior Tribunal de Justicia: "Por lo demás, el art. 13 de la ley 24.432 ha contemplado el deber de los jueces de regular honorarios a los letrados y demás auxiliares de la justicia sin atender a los porcentajes previstos en el

ordenamiento arancelario local si de ello resulta la fijación de estipendios que no guardan correspondencia con el tipo de proceso, su envergadura, ni con la extensión y calidad de las labores realizadas" (15/12/21 SI N° 290/21 Laboral).

Resulta oportuno señalar que la ley 24.432 incorpora el 2º párrafo al art. 1627 del Código Civil derogado y ha sido preservado por el nuevo Código Civil y Comercial en el art. 1255.

Por los fundamentos expuestos, se concluye que corresponde rechazar el recurso interpuesto.

III.- Atento la naturaleza de la cuestión traída a resolución de esta jurisdicción, por no existir contradicción y las atribuciones que concede el segundo párrafo del art. 69 del CPr., nos autoriza a eximir las costas devengadas ante esta instancia, lo cual implica su atribución en el orden causado, no correspondiendo regulación a favor de la Dra. N. M. D. N., letrada en causa propia (art. 11 Ley XIII-4).

Por ello, la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, **RESUELVE:**

1) Rechazar el recurso de apelación en subsidio interpuesto mediante ID 483423.

2) Disponer que la regulación de honorarios efectuada en fs). 23 es comprensiva de las dos etapas del presente proceso de ejecución de honorarios.

3) Sin imponer costas ni regular honorarios conforme considerando respectivo.

4) Regístrese, notifíquese y devuélvase.

La presente sentencia es firmada por dos vocales de Cámara por encontrarse en uso de licencia el Sr. juez de Cámara Dr. Manuel Horacio Pis Diez y existir concordancia en la solución del caso.

MARIA MARTA NIETO
Jueza de Cámara

VERONICA DANIELA ROBERT
Presidenta

SENTENCIA REGISTRADA BAJO EL N° 73 AÑO 2022
DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS

MARIA MAGDALENA CONSTANZO
Secretaria de Cámara